

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Auto Interlocutorio - Segunda Instancia

Santiago de Cali, siete (7) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicación No.	76001-33-33-004-2003-03707-05
Medio de control	REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
Demandante	ANA MATILDE ALEGRIA Y OTROS tafajard@hotmail.com
Demandados	COLPENSIONES oficina@munozmontilla.com
Tema	Resuelve recurso de reposición y solicitud de pérdida de competencia.

Mag. Ponente : FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ

Decide el Despacho, el recurso de reposición interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, en contra del auto del 3 de marzo de 2020, que admitió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda y corrió traslado para alegar de conclusión¹; así mismo se pronunciará sobre la solitud de la parte actora de práctica complementaria de la prueba pericial decretada en sede primigenia² y del requerimiento de declarar la pérdida de competencia por haberse excedido el plazo para resolver la segunda instancia, de conformidad a lo establecido en el artículo 121 del Código General del Proceso-CGP-.

Esta Corporación Judicial en Sala Unitaria de Decisión, sin entrar a realizar mayores elucubraciones y, en aras de que el proceso ingrese a Despacho para fallo, sin más dilaciones, con miras a resolver de manera definitiva la problemática puesta en consideración de la justicia, la cual lleva varios años en el trámite procesal, resuelve así el recurso interpuesto y las solicitudes de las partes:

Del recurso de reposición

¹ Fls. 464-466, c. 13

² Fls. 437-463, Ib.

El Despacho encuentra que contra el auto de 3 de marzo de 2020, que admitió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y corrió traslado para alegar de conclusión, procede el recurso ordinario de reposición, según lo establecido por el artículo 242 del CPACA, toda vez que sobre la procedencia del mismo no existe norma legal en contrario, y que la decisión no es de aquellas que son susceptibles de los recursos de apelación o súplica.

Tenemos entonces que:

Mediante proveído adiado 3 de marzo de 2020, este Operador Judicial admitió el recurso de apelación interpuesto por el mandatario de la parte accionante contra la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda y corrió traslado para alegar de conclusión, por el término de cinco (5) días.

Señala el procurador judicial, que se debió dar aplicación al artículo 327 inciso 3 del Código General del Proceso, y en ese sentido, convocar a la audiencia de sustanciación y fallo.

Teniendo en cuenta que la Ley 472 de 1998, no reguló el trámite procesal en segunda instancia en lo concerniente al término para alegar de conclusión, sería pertinente en virtud del artículo 68 ibídem, dar aplicación a lo establecido en el Código General del Proceso, y en esas condiciones, hubiera sido plausible que una vez *“Ejecutoriado el auto que admite la apelación, el juez convocará a la audiencia de sustentación y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicarán en la misma audiencia, y a continuación se oirán las alegaciones de las partes y se dictará sentencia de conformidad con la regla general prevista en este código”*.

Empero, lo cierto es que este Operador Judicial, en aras de la celeridad que se le debe imprimir a la presente acción de estirpe constitucional, y claro está, respetando la garantía del derecho al debido proceso, decidió sin desconocer los derechos de las partes, que se admitiera el recurso contra la sentencia de primera instancia y una vez ejecutoriado éste, se procediera a alegar de conclusión, pues emitir auto admisorio del recurso y luego convocar a audiencia de sustentación y fallo, conllevaría más término para decidir de fondo el presente asunto, amén de que, al tratarse de una decisión colegiada, que requiere la presencia de por lo menos otro de los Magistrados que integran la Sala Segunda Jurisdiccional de Decisión de este Tribunal, implicaría tener en cuenta la agenda de los mismos, para definir una fecha cierta a efectos de llevar a cabo la referida audiencia pública, pudiendo transcurrir un tiempo considerable para la realización de la misma, ya que no es solamente el suscrito Magistrado Ponente, sino los demás integrantes de la Sala, quienes deben hacer coincidir sus agendas, teniendo en cuenta el volumen de asuntos asignados a cada Despacho, dentro de los cuales, hay que tener en cuenta las convocatorias para realizar las audiencias iniciales, las de pruebas, de pacto de cumplimiento, de conciliaciones, las sesiones de Sala Plena, entre otras, todo lo cual haría que no se pudiera emitir en un término razonable la sentencia de segunda instancia, en un trámite que ha sido interrumpido

un sin número de veces, antes los múltiples requerimientos, recursos de las partes e intervinientes del mismo.

Recuérdese que el fin último, es la resolución del conflicto puesto en consideración de la justicia, dentro de un término prudencial, sin que se vea trastocado más su trámite, eso sí, otorgándosele a las partes la oportunidad procesal para realizar sus manifestaciones y sin que se les desconozcan sus derechos de defensa y contradicción.

Más que una aplicación literal de la normatividad, lo que se requiere es propender por la garantía del debido proceso y garantizar para que los derechos de las partes no se vean afectados. Aunado, a que, por la prolongación del trámite de la presente acción, lo que se requiere, es de la finalización de la misma, con el respeto de las garantías de las partes.

Recuérdese como lo estableció la Corte Constitucional, en sentencia C- 548 de 1997, que:

“(…)

Para que las decisiones de los jueces sean eficaces, es necesario que ellas sean ciertas, vinculantes y obligatorias, es decir, que su existencia no sea cuestionada, que su acatamiento sea forzoso y que en caso de que no sean obedecidas voluntariamente, puedan ser exigibles de manera coactiva. La ley procesal exige una serie de condiciones que contribuyen a dotar de certeza las decisiones judiciales. Fundamentalmente, la obligación de motivar la sentencia, con lo cual se facilita, además, el control de la función jurisdiccional y la defensa de las pretensiones de las partes por medio de los recursos y acciones; la congruencia, es decir, la perfecta adecuación entre las pretensiones de las partes y el contenido de la sentencia, y la firmeza de la decisión, esto es, que a partir de determinado momento, ella sea inalterable. La firmeza de las decisiones es condición necesaria para la seguridad jurídica. Si los litigios concluyen definitivamente un día, y tanto las partes implicadas en él como el resto de la comunidad, tienen certeza de que a partir de ese momento la decisión judicial es inalterable, el proceso cumple un papel eficaz en la solución de los conflictos. Este es el sentido de la cosa juzgada, en relación con la cual la Corte ha reconocido que hace parte de las garantías del debido proceso, consagradas en el artículo 29 de la Constitución, y está implícita en el concepto de administrar justicia.

(…)”.

En esas condiciones, estima este Operador Judicial que debe mantenerse incólume el auto recurrido.

Práctica complementaría de la prueba pericial decretada en sede primigenia

Respecto a dicha solicitud elevada por la parte actora, el despacho dispondrá que debe estarse a lo decidido mediante auto del 4 de octubre de 2019, a través del cual se resolvió:

“CONFIRMASE el auto interlocutorio No. 086 del 15 de febrero de 2019, por medio del cual el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, declaró cerrado el período probatorio y, corrió traslado a las partes por el término de cinco días para que presenten alegatos de conclusión, acorde con lo explicado en la parte motiva de esta providencia.”

Decisión que se adoptó tras considerar que:

“...La Sala Unitaria de Decisión considera que ciertamente a estas alturas la complementación del dictamen pericial, resulta inoficiosa, porque como bien lo indicó el juez de primera instancia el porcentaje que se debe aportar a la administradora de pensiones está regulado por la ley; los valores descontados a los actores y el IBC, obran en medio magnético que fue aportado por el Municipio de Cali y; la forma en la que Colpensiones redistribuyó el porcentaje para invalidez, sobrevivencia y gastos de administración fue informada por dicha entidad³... La Sala no desconoce que en su momento estuvo de acuerdo en que estaba pendiente de la complementación del dictamen pericial para poder dictar el fallo de mérito, incluso en varias oportunidades revocó los autos que intentaron cerrar la etapa probatoria y, le ordenó al juzgado, que hasta que no complementara el dictamen pericial no cerrara la etapa probatoria. Sólo que, en este momento las circunstancias han cambiado ya que revisado nuevamente el expediente, se tiene que hay abundante material a partir del cual se puede tomar una decisión. Además, el Juzgado como el Tribunal ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para procurar recaudar la prueba pericial y, eso lo muestra cada uno de los autos y los requerimientos, que se han dictado, sin conseguir ningún resultado. Y la etapa probatoria no puede permanecer indefinida en el tiempo hasta que las partes se dignen a aportar los documentos requeridos, sobre todo cuando este proceso ya lleva más de 15 años en etapa probatoria. Luego, no luce razonable seguir insistiendo en la complementación del dictamen pericial que de todas maneras ya no resulta necesario para dictar un fallo de mérito porque existe suficiente material documental, a partir de la cual puede hacer una abstracción del problema jurídico y, la posible forma de su resolución, máxime cuando la controversia más que técnica es jurídica...”.

Solicitud de declarar la pérdida de competencia por haberse excedido el plazo para resolver la segunda instancia, de conformidad a lo establecido en el artículo 121 del Código General del Proceso-CGP-.

El artículo 121 del C.G.P. estipula que:

“(...)

ARTÍCULO 121. DURACIÓN DEL PROCESO. Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal.

(...)”.

Sin embargo, esta disposición normativa es incompatible e inaplicable en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues no existe vacío normativo en la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.) en lo que respecta a la duración del proceso y los términos en que se debe proferir la sentencia, que sugiera acudir a otro cuerpo normativo para resolver tal aspecto.

³ Folio 246-267.

Ello, por cuanto tratándose de los términos de instrucción del proceso, la etapa de juzgamiento y el término para proferir la sentencia, dentro del medio de control de perjuicios ocasionados a un grupo, se encuentran regulados expresamente en el artículo 67 del estatuto especial que regula dicho medio de control, esto es, la Ley 472 de 1998, el cual establece lo siguiente:

“ARTICULO 67. RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA. La sentencia es apelable en el efecto suspensivo. En este evento el Juez ordenará se preste caución para garantizar las medidas cautelares de embargo y secuestro.

El recurso de apelación deberá resolverse por la autoridad judicial competente en un término máximo de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de radicación del expediente en la Secretaría General; sin embargo, cuando sea necesario practicar nuevas pruebas, el término para decidir el recurso podrá ampliarse en diez (10) días.

Contra las sentencias proferidas en los procesos adelantados en ejercicio de las Acciones de Grupo proceden el recurso de revisión y el de casación, según el caso, de conformidad con las disposiciones legales vigentes; pero en ningún caso el término para decidir estos recursos podrá exceder de noventa (90) días contados a partir de la fecha en que se radicó el asunto en la Secretaría General de la Corporación”.

Término que de paso ha de precisarse, debe tener en cuenta los procesos asignados a este operador judicial, y que se están tramitando, las acciones de tutela y de cumplimiento que tienen prioridad y que, además se ha visto interrumpido por las reiteradas solicitudes o recursos impetrados por las partes, amén de la situación de emergencia sanitaria y social, derivada de la pandemia generada por el Coronavirus-COVID-19, pandemia que aqueja a la humanidad entera y particularmente el adecuado funcionamiento de todos los sistemas judiciales del mundo.

Así las cosas, al no existir vacío normativo en la Ley 472 de 1998, que permita la aplicación del artículo 121 de C.G.P., se impone negar la solicitud de pérdida automática de competencia planteada por el apoderado de la parte demandante.

En razón y mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca-Sala Jurisdiccional Unitaria de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NO REPONER PARA REVOCAR, el auto del 3 de marzo de 2020, que admitió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda y corrió traslado para alegar de conclusión, conforme a lo explicado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NIÉGASE las solicitudes de complementación del dictamen pericial y pérdida automática de competencia, elevadas por la parte actora.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, remítase el expediente al Despacho para emitir la sentencia de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

A handwritten signature in dark ink, featuring a stylized 'F' and 'G' with a large loop, followed by 'AUGUSTO GARCIA MUÑOZ'.

FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ
Magistrado